

Partidos y pactos políticos en la Córdoba Libertadora (1955-1958)

"Hoy un Juramento, mañana una traición..."
Amores de Estudiante
(C. Gardel-Le Pera)

César Tcach

A diferencia de países como Alemania o Bélgica, las experiencias de compromisos multipartidarios estables y gobiernos de coalición, constituyeron una *rara avis* en la historia política contemporánea de Argentina. En contraste con los sistemas de partidos que Giovanni Sartori caracterizó como de "pluralismo moderado", los pactos interpartidarios de gobierno raramente llegaron a concretarse, y en todo caso, estuvieron signados por su fragilidad.¹ Ni la teoría de formación de coaliciones de W. Gamson —según la cual los participantes en las mismas deben tener una participación en los beneficios proporcional a los recursos aportados (norma de paridad)— ni la teoría de formación de coaliciones de Chertkoff —que desconoce la norma de paridad al sostener que el participante "más débil de todos es tan fuerte como el más fuerte" si su ausencia impide a una coalición ser ganadora— son suficientes para explicar la casi nula operatividad de los compromisos interpartidarios de gobierno en el caso argentino.²

Natalio Botana explicó la precariedad de los compromisos interpartidarios en términos de un "pluralismo negativo": las pautas de comportamiento de los partidos políticos se apoyarían más en el objetivo de derrotar al rival que en

César Tcach es Investigador
Principal del Área de Partidos
Políticos - CEA - UNC.

garantizar el éxito propio.³ De modo similar, Eugenio Kvaternik consideró que a partir de 1955 los partidos argentinos no pudieron escapar al "dilema del prisionero".

Como es sabido, en éste se sugiere la imagen de dos detenidos que tienen tres posibilidades. Si ambos se delatan las penas se reducen, si uno de ellos opta por delatar, el que calla carga las penas de ambos. Finalmente, la falta de confianza en el otro provoca que los dos "canten". De modo análogo, la tibieza de fe de los partidos en el juego político democrático, los empujó a actitudes desleales.⁴

Guillermo O'Donnell, en cambio, prefirió relacionar el tema de las coaliciones con la interferencia de un referí —las Fuerzas Armadas— provisto de determinadas reglas que desnaturalizaban la dinámica interpartidaria, convirtiéndola en un "juego imposible" que conducía a una situación de bloqueo recíproco.⁵

Ciertamente, tanto la imagen de un "juego imposible" como la del "dilema del prisionero", constituyen metáforas seductoras. Pero este trabajo se sitúa en un nivel de análisis distinto. Se propone estudiar el fenómeno a partir de un caso singular: la única experiencia —con cierta extensión temporal— de compromiso pluripartidario de gobierno en la historia contemporánea de Córdoba. Me estoy refiriendo al gobierno del Gral. Medardo Gallardo Valdez, que se extendió desde el 15 de diciembre de 1955 al triunfo electoral de Arturo Zanichelli en 1958. El período de la Revolución Libertadora presenta condiciones ideales para analizar esta cuestión. En primer lugar, porque los partidos políticos coincidieron en la necesidad de extirpar a un actor político —el peronismo— pero fueron incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos sobre las reglas que debían regir la dinámica interpartidaria. En segundo lugar, porque en Córdoba la revolución de septiembre asumió características específicas que, presuntamente, favorecían la cohesión del conjunto del campo antiperonista. Distó de ser la revolución radical soñada por Sabattini, no fue un cuartelazo o un mero pronunciamiento, tampoco se pareció a las mediciones de fuerzas que años después protagonizaron "azules" y "colorados". En su gestación y desarrollo participaron activamente amplios sectores de la oposición política. Compartieron la defensa de la ciudad y las acciones militares, radicales sabattinistas y unionistas, dirigentes de Acción Católica y del Partido Demócrata Cristiano, demócratas nacionales, socialistas y grupos nacionalistas.

1. Giovanni Sartori, *Partidos y sistemas de partidos*, págs. 224-234, Alianza Universidad, Madrid, 1987.

2. Para una revisión de las teorías de Gamson y de Chertkoff, véase Eugenio Kvaternik, "Sobre partidos y democracia en la Argentina entre 1955 y 1966", en *Desarrollo Económico*, N° 71, págs. 414-415 (1978).

3. Véase Natalio Botana, *El orden político en la Argentina Moderna*, Instituto Di Tella, 1977.

4. E. Kvaternik, *op. cit.*

5. Sobre el debate entre Kvaternik y O'Donnell, véase "Qué democracia? Respuesta a un comentario de E. Kvaternik" en *Desarrollo Económico* N° 72 (1979).

Este protagonismo de los civiles en el levantamiento armado, constituyó un hecho fundacional sobre el que se forjó una mitología provista de principios y símbolos propios. Proclamada por Lonardi, *Capital Provisional de la Argentina*, la provincia mediterránea pasó a ser en la percepción de periodistas, políticos y militares, "Córdoba la Heróica", "cuna de la libertad", "bastión de la fe", "reducto inexpugnable de la nacionalidad"...

LA ASUNCION DE ARAMBURU Y LOS PARTIDOS CORDOBESES

Con la excepción de la pequeña Unión Federal —que presidía en la capital cordobesa Enrique Herrera— el derrocamiento del presidente Lonardi fue observado con beneplácito por el conjunto del arco político partidario. Horas después de haber asumido Aramburu la primera magistratura de la nación, Arturo Frondizi declaró: "soy optimista sobre el curso de los acontecimientos".⁶ Al día siguiente, el comité nacional del radicalismo expresó, unánimemente, su respaldo al nuevo presidente. Esta actitud fue también compartida, aunque con matices propios, por demócratas nacionales, socialistas y demócratas cristianos.

El líder conservador Juan José Aguirre Cámara fue el más contundente. Sostuvo que el lema "Ni vencedores ni vencidos" era un "aforismo declamatorio enmarcado de generosidad y grandeza, utilizado para traicionar el sentido democrático de la revolución, dentro de ella misma, convirtiéndola en un golpe nacionalista extremo".⁷ Con más cautela pero no con menos firmeza, el dirigente demócrata cristiano Manuel Ordoñez expresaba: "La revolución para ser salvada, ha necesitado esta operación tan dolorosa y también el sacrificio de un hombre que había contribuido al triunfo de la gesta libertadora".⁸ El mismo 13 de noviembre, una declaración del P.D.C. de Córdoba subrayaba enérgicamente sus diferencias con el grupo de Clemente Villada Achaval, cuyo ascendiente sobre el gobierno de Lonardi había sido insoslayable. Al respecto sostenía:

"... así como el partido rechaza todo posible pacto con las fuerzas oligárquicas o marxistas, confesadas o encubiertas, jamás ha transigido ni transigirá con los elementos nacionalistas, rosistas, o reincidentes en la perniciosa confusión de los planos religioso y político".⁹

6. *Córdoba*, 13-11-55.

7. *Los Principios*, 17-5-56.

8. *Córdoba*, 15-11-55.

9. *La Voz del Interior*, 14-11-55.

En el otro ángulo del espectro ideológico, La Federación Socialista cordobesa apoyó explícitamente el desplazamiento de Lonardi por Aramburu. Desde su punto de vista, el recambio en la cúpula presidencial había permitido echar por tierra los intentos de los grupos nacionalistas que "conspiraban para torcer el rumbo democrático de la revolución".¹⁰ Como puede apreciarse, el nuevo presidente —oriundo de la meridional ciudad cordobesa de Río Cuarto— iniciaba su gestión sobre la base de un apoyo político tan amplio como diverso.

EL GOBIERNO DE GALLARDO VALDEZ: COMPROMISO MULTIPARTIDARIO Y PREDOMINIO RADICAL

El presidente Aramburu nombró interventor en Córdoba al Comodoro Medardo Gallardo Valdez. De acuerdo con su propio relato, entre 1947-49 fue marginado a un puesto de agregado aeronáutico en Panamá, "donde no existía ni ejército ni aviación militar". En 1950 pasó a retiro.¹¹ Se trataba de un militar antiperonista que a diferencia de su predecesor, el Gral. Dalmiro Videla Balaguer, carecía de vínculos previos con sectores políticos locales. Esta circunstancia lo situaba en una posición de relativa autonomía para constituir su gobierno. En la composición del gabinete provincial, la U.C.R. obtuvo dos ministerios claves, los de Gobierno y Hacienda, que fueron ocupados por Juan Palmero y Pedro León, respectivamente.¹² De esta manera, la U.C.R. —confinada durante la anterior intervención al Ministerio de Obras Públicas— pasaba a ejercer un papel político central.

Los ministerios de Salud y Obras Públicas, quedaron en manos del Partido Demócrata Nacional, siendo encabezados por sus dirigentes Luis Argüello Pitt y Raúl Eduardo Ferreyra. En el ámbito educativo, el interventor creó una Secretaría de Educación y Cultura, organismo que intentó mantener bajo su personal y directa supervisión a fin de evitar conflictos. Por ello designó como titular de la misma al abogado Fernando Díaz Ulloque ex-presidente del Ateneo católico de Corrientes y hasta entonces su

10. *Ibid.* 16-11-55. Cabe señalar que durante la gestión del presidente Aramburu, la dirigencia política cordobesa ocupó un lugar de relevancia en el plano nacional: el unionista Mauricio Yadarola fue nombrado embajador en EE.UU., el Dr. Manuel Río Allende embajador en el Vaticano, el sabatinista Antonio Medina Allende ejerció la presidencia del Banco Central y, a mediados de 1956, el dirigente demócrata Rodolfo Martínez reemplazó a Alvaro Alsogaray como ministro de Industria y Comercio.

11. *Ibid.* 20-4-57.

12. Juan Palmero era un abogado oriundo del dpto. San Justo, enrolado en las filas del sabatinismo. Pedro León había sido ministro de Hacienda durante el gobierno sabatinista de Santiago del Castillo.

secretario privado.¹³ Como presidente del Consejo Gral. de Educación fue nombrado el Dr. Emilio Sánchez, figura que contaba con el respaldo del catolicismo local.¹⁴

En el orden municipal, Gallardo Valdez decidió no innovar permitiendo que el Dr. Emilio Olmos —destacado dirigente del P.D.N.— continuara ejerciendo la titularidad de la intendencia capitalina.

A juzgar por lo expuesto, es posible colegir que se asistía a una experiencia política caracterizada por tres factores fundamentales: el compromiso multipartidario, el papel clave del radicalismo en la distribución de los recursos institucionales del Estado, y la mantención del predominio de fuerzas católicas o conservadoras en áreas ya controladas durante la gestión del anterior interventor, como la educativa o municipal. De este modo, el segundo gobernador post-peronista ensayaba una fórmula política orientada a alcanzar el consenso a través de una asociación de factores de continuidad y cambio. Pero, como tendremos ocasión de ver, la progresiva preeminencia de la U.C.R. —en virtud de su control del estratégico Ministerio de Gobierno— conspiró seriamente contra sus intenciones iniciales.

CONFLICTO EDUCATIVO Y PRIMERA QUIEBRA DE LA JUNTA CONSULTIVA

Cuando en marzo de 1956 el presidente Aramburu visitó Córdoba, tras el clima solemne y festivo del recibimiento oficial, podían advertirse los primeros puntos débiles del compromiso interpartidario. Mientras los estudiantes reformistas cubrían el centro de la ciudad con volantes que exigían la renuncia del ministro de educación Atilio dell'Oro Maini, el Comité Coordinador de Asociaciones Católicas de Padres y Educadores le hizo entrega de un petitorio favorable a la modificación del art. 8 de la ley 1420, que afectaba a la enseñanza religiosa en las escuelas primarias nacionales.¹⁵ Estas tensiones entre laicismo y catolicismo en el campo educativo, comenzaban a atravesar el escenario político nacional y no tardaron en encontrar en Córdoba una caja de resonancia privilegiada.

Ciertamente, el interventor inició su gestión intentando alcanzar fórmulas de compromiso. Porque si el ministerio político por excelencia —el de Gobierno— fue cedido a un reconocido y prometedor dirigente radical, Juan Palmero, el de Educación fue ofrecido a Fernando Díaz Ulloque, cuya trayectoria como presidente del colegio de Abogados y del Ateneo de

13. *Los Principios*, 18-1-56. La secretaria mencionada adquirió, pronto, rango ministerial. Sobre su creación, véase *La Voz del Interior*, 29-12-55.

14. *Los Principios*, 18-1-56.

15. *Ibid.* 26-5-56, 9-6-56.

Corrientes concitaba el apoyo del catolicismo local.¹⁶ Su designación estaba en consonancia con las directrices emanadas del gobierno nacional. El médico Agustín Caeiro —figura de gran predicamento en el medio científico y uno de los pioneros de la Democracia Cristiana cordobesa— fue nombrado rector interventor de la Universidad Nacional de Córdoba. Se trataba, pues, de una sutil y trabajada operación política orientada a lograr un equilibrio a través de hombres prestigiosos que garantizaran las aspiraciones más preciadas de cada sector.

¿El establecimiento de fronteras institucionales y la utilización de figuras prestigiosas, bastaría para evitar el conflicto? Para dar respuesta a este interrogante es necesario considerar dos factores: a) El peso de un catolicismo tradicionalmente fuerte, revitalizado por el papel clave que desempeñó en Córdoba durante el derrocamiento de Perón. b) La presencia de un radicalismo vinculado a la herencia laicista de la Reforma Universitaria y de los gobiernos sabattinistas. Ambos factores se conjugaron, como veremos, para socavar la cohesión de las bases de apoyo al gobierno provincial.

En febrero de 1956, el editorial del diario católico *Los Principios* expresa-ba con firmeza su punto de vista:

"Ya sabemos cuál es el origen del laicismo: el sectarismo antireligioso. No es fruto de nuestra tierra: lo trajo al país la masonería. Ella fue la inspiradora de la ley 1420 [...].

¿Vamos a dejar imponer su orientación a unos grupos minoritarios proclives al totalitarismo marxista? El laicismo es, pues, contrario a la democracia: es totalitario y está en pugna con las mejores tradiciones argentinas".¹⁷

Al comenzar el otoño, la presión del catolicismo cordobés se vio coronada por el éxito. El Comité coordinador de Padres y Educadores Católicos —cuyo eje articulador era Acción Católica (*)— felicitaba al interventor y a su ministro de educación por haber restituido la ley 1426, que establecía "la enseñanza optativa de la religión católica dentro de las materias de horario".¹⁸

La batalla de la educación, empero, recién comenzaba. Para que la ley 1426 tuviera vigencia era necesaria su reglamentación, hecho que tendía a ser dilatado o entorpecido por los partidarios del laicismo, dentro y fuera

16. *Ibid.* 18-1-56.

17. *Ibid.* 7-2-56.

18. *Ibid.* 8-4-56.

* En 1956, Acción Católica estaba presidida por Enrique Broxer de Koning y contaba con 2.500 socios activos. El Comité Coordinador estaba formado, además, por: Liga Católica de Padres de Familia, Consorcios de Colegios Católicos, Liga de Madres Católicas, Asociación del Divino Maestro, Obra de Don Bosco, Federación de Maestros y Profesores Católicos, Unión de Padres y Alumnos del Colegio Santo Tomás, Grupos de Nazareth, Fed. de Padres de Colegios Católicos y Consejo Catequístico. *Los Principios*. 8-4-56 y 12-5-56.

del gobierno. Es por eso, que en la segunda quincena de mayo el Comité Coordinador organizó una multitudinaria movilización bajo el lema "Primer Plebiscito sobre Educación". Reunida en la Plaza Vélez Sarsfield, cerca de las puertas mismas de la Casa Radical, se dirigieron a la concurrencia figuras de reconocida trayectoria como Lila Perren, el ing. Emilio Salcedo o el padre Quinto Cargnelutti. Al día siguiente, la prensa católica titulaba su editorial *La Córdoba Auténtica*, y extraía conclusiones sobre el acto:

"La tradición de la ciudad docta, cristiana, celosa guardadora de una historia gloriosa, título que revalidó con la última y merecida calificación de heroica, estuvo presente en todo instante.

Las ideologías exóticas [...] están lejos del corazón de esta Córdoba".¹⁹

La movilización católica, sin embargo, no era sino la contracara de la promovida por el estudiantado que se agrupaba en la Federación Universitaria de Córdoba. Apoyada por radicales, socialistas y comunistas, la F.U.C. rechazó el decreto 6403 del P.E.N. sobre universidades libres y reestructuración de universidades nacionales. Al respecto, el dirigente estudiantil Gustavo Roca —hijo de Deodoro, principal líder de la Reforma Universitaria de 1918— argumentaba: "... los interventores de la Universidad y los delegados interventores de las facultades poseen omnípodo poder y ejercen facultades extraordinarias. Se ha consagrado por decreto ley una original especie de monarquía universitaria". A su juicio, el decreto-ley dejaba en el olvido tanto el gobierno tripartito como los concursos en un marco de transparencia democrática, dado que los interventores debían elevar al Poder Ejecutivo las ternas por orden de méritos de los profesores concursados. Vale decir —añadía con virulencia— que "el Poder Ejecutivo [...] aceptará o no el dictamen de las comisiones asesoras y nombrará o no al indicado en la terna. En suma, el Poder Ejecutivo designará profesor a quien le venga en ganas [...] y podrá prescindir del consejo de las comisiones asesoras, meros tribunales de consejo, nunca tribunales de sentencia".²⁰

En mayo, el enfrentamiento pasó de las palabras a los hechos. Alentados por la F.U.C., los estudiantes tomaron la Universidad —su sede de la calle Obispo Trejo— y pidieron la renuncia tanto del rector A. Caeiro como del ministro de educación de la nación. Las reticencias de Juan Palmero —el ministro de gobierno radical— a recurrir al empleo de la fuerza, originó una airada protesta del Partido Demócrata Cristiano, que solicitó la renuncia de Palmero y acusó al interventor federal de "pasividad cómplice".²¹ Esta postura fue compartida por el Partido Demócrata Nacional. Su representante en la Junta Consultiva Provincial, Parmenio Ferrer Sosa, expresaba: "El

19. *Ibid.* 20-5-56.

20. *Ibid.* 25-2-56; *Córdoba*, 25-2-56.

21. *Los Principios*. 13-5-56.

rector ha requerido el apoyo de la fuerza para el respeto de su jerarquía, de su autoridad, y el señor Jefe de Policía [...] le ha negado el apoyo".²²

Finalmente, la Universidad fue clausurada y sus edificios custodiados por soldados de la Escuela de Infantería.²³ Pero el conflicto había quebrado el consenso interno en la Junta Consultiva Provincial de Partidos Políticos, principal base de apoyo al interventor federal. La renuncia del rector demócrata cristiano, Agustín Caeiro, y la cuestionada actitud del ministro de gobierno Juan Palmero, operaron como catalizadores de las tendencias a la confrontación.

Fue así que, en ausencia de representantes de la Democracia Cristiana, la Junta Consultiva aprobó —por iniciativa del radical unionista Carlos Becerra— una declaración de apoyo al gobierno provincial en lo referido al conflicto universitario, y más aún, se pronunciaba a favor de la derogación de la ley de reestructuración universitaria y de la renuncia del ministro Atilio dell'Oro Maini.²⁴

La permeabilidad del gobernador a las presiones del radicalismo contribuyó a agudizar las tensiones: reemplazó al ministro de educación Díaz Ulloque por César Romero, figura que distaba de contar con la simpatía del catolicismo local.²⁵ El cambio tuvo su correlato en el Consejo General de Educación. Su director, Emilio Sánchez —cuyo equipo de trabajo dirigido por Armando Tagle era grato a los ojos de la Iglesia—, fue sustituido por un joven abogado que acababa de egresar de la U.N.C. Su único antecedente era haberse desempeñado como secretario privado del interventor federal. Se trataba de Héctor Raúl Sandler (quien años después se convertiría en el máximo dirigente de UDELPA-Córdoba). Su nombramiento generó el rechazo inmediato del diario católico *Los Principios*, que lo calificó de "joven carente de aptitudes".²⁶

Los nuevos funcionarios del área educativa, pusieron en vigencia un reglamento de 1937 —gobierno de Amadeo Sabattini— que restringía a sólo media hora semanal la enseñanza de religión en los colegios. Esta medida marcó un punto de no retorno en las relaciones del gobierno con los sectores políticos vinculados al catolicismo. La prensa católica denunciaba: "... aquí en Córdoba, se está entregando la educación a un equipo de

22. *Ibid.* 17-5-56.

23. *Ibid.* 22-5-56.

24. *Ibid.* 16-5-56.

25. "¿Por qué no se lo quería a César Romero? Era un hombre muy activo y trabajador, pero extremadamente antiperonista. Como decano de la Facultad de Derecho había dejado cesantes a distinguidos profesores católicos que colaboraron, en algún momento, con el peronismo", Entrevista al Dr. Fernando Martínez Paz (diciembre de 1992). Otros datos permiten confirmar este testimonio oral. Entre los docentes eliminados de la Facultad de Derecho figuraban apellidos ilustres de la élite cordobesa, como Alfredo Fragueiro y Enrique Carranza. En septiembre, el nuevo ministro dejó cesante a la directora de la Escuela Normal Superior "Garzón Agulla", Lilia Moreno, acusada de filo-peronismo, circunstancia que lo enfrentó al conjunto de las fuerzas católicas de Córdoba. *Ibid.* 27-3-56, 20 y 21-9-56.

26. *Ibid.* 27-7-56

hombres, ante todo, político e ideológico".²⁷ Mientras que el Partido Demócrata Cristiano, interpretaba la resolución gubernamental como un intento de "desterrar" la enseñanza religiosa en la provincia.²⁸

La respuesta del Partido Demócrata Cristiano distó de ser meramente verbal. Su presidente en Córdoba, Juan José Torres Bas —quien a la sazón, ejercía la vicepresidencia de su junta directiva nacional— autorizó a sus delegados en la Junta Consultiva provincial de partidos políticos a retirarse de la misma.²⁹ Era, pues, un duro golpe al interventor federal, quien quedaba deslegitimado ante todos los sectores del catolicismo cordobés. Porque si ahora eran los demócratas cristianos quienes rompían con la Junta, nunca se habían incorporado a ella los nacionalistas católicos agrupados en Unión Federal.³⁰

El repliegue del apoyo católico situaba a Gallardo Valdez en una difícil situación, dado que este distanciamiento carecía de correlato en el plano nacional. Así, mientras la representatividad de su organismo asesor era seriamente puesta en cuestión, el Ministerio del Interior nombraba a un demócrata cristiano de Córdoba —el Dr. José Antonio Allende— como nuevo miembro de la Junta Consultiva Nacional.³¹ El respaldo al presidente Aramburu se mantenía incólume, pero su interventor en Córdoba era mantenido en la mira.

Ciertamente, al comenzar la primavera de 1956, la situación política de Córdoba se había modificado sustancialmente. Su Universidad ya no tenía un rector demócrata cristiano, y en el Ministerio de Educación los "hombres de fe" habían sido sustituidos por políticos profesionales más vinculados a la derecha liberal o a la u.c.r. que a la propia Iglesia Católica. Por consiguiente, se podría afirmar que Gallardo Valdez había roto uno de los pilares sobre los que se basaba el equilibrio político que había dado consenso inicial a su gobierno.

COMPETENCIA POR ESPACIOS INSTITUCIONALES Y SEGUNDA QUIEBRA DE LA JUNTA CONSULTIVA

Conviene a mi argumentación recordar que el Partido Demócrata Nacional fue uno de los principales protagonistas de la vida política cordobesa en el período precedente al surgimiento del peronismo. La eclosión de éste, empero, sedujo a una parte importante de sus dirigentes y caudillos depar-

27. *Ibid.* 20-8-56.

28. *Ibid.* 11-8-56.

29. Los delegados del P.D.C. en la Junta Consultiva eran: Teodosio Pizarro, José María Vélez y Enrique F. César. *Ibid.* 3 y 7-8-56. La Junta Ejecutiva Provincial del P.D.C. era integrada por Horacio Sueldo, Edumundo Rigo, Luis Torres Amuchástegui y J. J. Torres Bas. Este fue elegido presidente en febrero de 1956, en reemplazo de Alberto Vélez, designado para un cargo diplomático en el exterior. *Córdoba*, 11-2-56.

30. *La Voz del Interior*, 30-12-55.

31. *Los Principios*, 11-8-56.

tamentales, circunstancia que afectó seriamente su fortaleza política y organizativa.³²

Las divisiones internas agravaron su debilidad. En los albores de la "Revolución Libertadora", tres corrientes se disputaban la dirección del partido: una encabezada por J. J. Aguirre Cámara, otra por José A. Mercado, y la restante por Felipe Yofre Pizarro. Mientras las dos primeras se proclamaban liberales, progresistas y admiradoras del democrático conservadurismo británico, la tercera tendía a identificarse con los principios del tradicionalismo católico.

En noviembre de 1955, los tres sectores alcanzaron un acuerdo de unidad para formar una junta reorganizadora que asumiese la dirección partidaria en la provincia.³³ Se trataba de un dato alentador que se asociaba a otros signos promisorios. El gobernador había dejado en sus manos la intendencia de la ciudad y dos ministerios (Salud y Obras Públicas). Pero el optimismo inicial pronto cedió paso al malestar.

El ministro de gobierno, Juan Palmero, asumió un creciente poder de decisión en el nombramiento de comisionados municipales y jefes departamentales en el interior de la provincia. En consecuencia, la U.C.R. se convirtió —con el aval del interventor federal— en la principal suministradora de personal político en una órbita cuyo control era clave para incidir en las futuras contiendas electorales. Cuando en julio de 1956 el presidente Aramburu anunció la celebración de elecciones al año siguiente, las tensiones entre radicales y demócratas nacionales se hicieron explícitas. La chispa que encendió el conflicto fue un hecho en apariencia menor: la cesantía de Olgúin Nuñez, comisario departamental de Minas —en el noroeste de la provincia— a quien el radicalismo acusaba de haber sido secretario general del Partido Peronista en esa localidad. La primera reacción provino de la juventud demócrata, que en una carta al presidente de su partido, Arturo Uanini, sostenía:

"¿Sabe el señor presidente que todo demócrata que ocupa un cargo en la función pública, es perseguido y frecuentemente decapitado, por altos funcionarios que representan a cierto partido político, para colocar en su reemplazo a otro hombre no más capacitado, ni poseedor de cualidades superiores, pero sí perteneciente al partido antes nombrado? [...]"

Son numerosos los casos de atropello perpetrados contra dirigentes o afiliados al Partido Demócrata en la campaña".³⁴

32. Estudié esta cuestión en *Sabatinismo y Peronismo, Partidos Políticos en Córdoba 1943-1955*, tesis doctoral publicada en 1991 por Ed. Sudamericana.

33. *Córdoba*, 20-11-55. La junta reorganizadora provincial del P.D.N. estaba formada por Arturo Uanini (presidente), Luis Laje Weskamp, Adelmo Montenegro, José A. Mercado, Rómulo Carrara Moroni, León Morra y Alfredo Bortoluzzi (secretarios).

34. *Los Principios*, 27-7-56. El subrayado es mío.

En consonancia con su denuncia, la Junta Provincial de la Juventud del Partido Demócrata solicitó medidas drásticas, a saber, quitar todo apoyo al interventor y retirarse de la Junta Consultiva de partidos políticos.³⁵ De igual modo, la Junta Capital de la Juventud expresó:

"Que el interventor federal se ve gobernado e inclinado a *favorecer al partido radical* [...]

Que las arbitrariedades cometidas por el Ministerio de Gobierno, revelan que se ha apartado de su misión específica dedicándose únicamente a *radicalizar la función pública sin tasa ni medida*.

[...] ha llegado la hora de demostrar a la *opinión pública antiradical* que el Partido Demócrata no se ata al carro de ninguna Intervención".³⁶

Esta declaración fue contestada por otra, no menos virulenta, de la Juventud Radical: "Olvida seguramente la Juventud del Partido Demócrata, que el pueblo los ha abandonado y que ya no representan ni la quinta parte de la opinión pública ¡Por no decir ninguna!".

El comunicado concluía identificando al Partido Demócrata con "los eternos enemigos del pueblo".³⁷ A tenor de lo expuesto, es posible constatar un alto grado de polarización política en el interior del campo antiperonista. La elección de los términos utilizados en sendos documentos —opinión pública antiradical/eternos enemigos del pueblo— reflejaba el carácter policéntrico de la intolerancia política. La intransigencia con respecto al peronismo se completaba con una dinámica interpartidaria marcada por una tendencia a la polarización.

En las circunstancias descriptas, el comodoro Gallardo Valdez se entrevistó con la plana mayor del Partido Demócrata de Córdoba. A. Uanini, J. J. Aguirre Cámara y J. A. Mercado expresaron su disposición a mantener el apoyo al interventor, siempre y cuando fuera desplazado el ministro de gobierno.³⁸ A la propuesta de la dirección demócrata —atemperada en relación a la de sus organismos juveniles— correspondió una respuesta muy dura de Gallardo Valdez en defensa de su ministro. Tras la entrevista, el interventor advirtió que retirar el apoyo a su gobierno suponía desconocer al propio presidente Aramburu, y por consiguiente, tornaba "incompatible" la permanencia de dirigentes demócratas en cargos de la administración pública provincial.³⁹

35. *Ibid.*

36. El comunicado fue firmado por Marcelo Valdez Beltrán (presidente) y Juan C. Domínguez (secretario). *Ibid.* 1-8-56. El subrayado es mío.

37. El documento era firmado por Elio Ceballos, presidente del Comité Capital de la Juventud Radical. *Ibid.* 3-8-56.

38. Esta fórmula no era compartida por el sector juvenil: "La juventud no pide la cabeza de ningún ministro", propone "cortar relaciones con la Intervención Federal y llevar el planteo hasta su total acabamiento, sometiéndolo al superior gobierno de la nación". *Ibid.* 3-8-56.

39. *Ibid.* 2-8-56.

Las puertas del conflicto, pues, quedaban abiertas. El Partido Demócrata se retiró de la Junta consultiva —poco tiempo antes lo había hecho la Democracia Cristiana— y numerosos funcionarios demócratas amenazaron con renuncias que finalmente no se concretaron, entre ellos el ministro de Obras Públicas. A principios de 1957, el conflicto se agudizó. Gallardo Valdez rechazó el proyecto de presupuesto municipal presentado por el intendente demócrata de la capital, Emilio Olmos. En octubre, le solicitó la renuncia a raíz del despido "sin ajustarse a las leyes de trabajo" de cincuenta obreros de la Unión Tranviaria Automotor (U.T.A.).⁴⁰ Fue sustituido por otro intendente perteneciente al mismo partido, el Dr. Horacio Ferreyra, pero la visión demócrata del gobierno provincial era unívoca. *Aguirre Cámara* envió un telegrama a Emilio Olmos: "Usted se va, en definitiva, porque el sabattinismo [...] en posesión allí de todos los resortes del poder, sin contrapeso alguno, no se resignaba al contraste entre su propia inoperancia y la obra constructiva suya".⁴¹ Confirmaba, así, el punto de vista expresado por el Dr. Pedro J. Frías un año antes:

"... es indispensable que el partido asuma una independencia digna frente a los demás partidos, y específicamente, al Partido Radical que en más o en menos gobierna la provincia".⁴²

Progresivamente, el control de los recursos político-institucionales se fue inclinando a favor de la U.C.R. Varios factores confluyeron en esa orientación: el declive del Partido Demócrata iniciado durante la etapa peronista, la fuerza aún incipiente de la novel Democracia cristiana, el peso tradicional de la maquinaria radical, y sobre todo, del sabattinismo que no se resignaba a dejar su lugar central en la escena política cordobesa. La habilidad de Juan Palmero —futuro ministro del Interior del presidente Illia— hizo el resto.

Una declaración sabattinista sostenía que "los delegados interventores, salvo honrosas excepciones" eran tolerantes con el conservadorismo. Sin duda, para los radicales cordobeses, el comodoro Medardo Gallardo Valdez era una de esas honrosas excepciones.⁴³

40. *La Voz del Interior*, 29 y 31-10-57, 1-11-57.

41. *Ibid.* 30-10-57.

42. *Los Principios*, 26-10-56.

43. *Córdoba*, 18-2-56: Cabe señalar, no obstante, que en abril de 1957 se produjo un incidente que enturbió parcialmente las relaciones del interventor con un sector del radicalismo. Un discurso sumamente crítico de Santiago del Castillo —en el que calificó de "improvisado" y "paracaidista" al comodoro Gallardo Valdez— provocó el último... reto a duelo en la vida política cordobesa. Las aclaraciones pertinentes del dirigente radical, empero, impidieron que se consumara. *La Voz del Interior*, 17-4-57.

CONCLUSION: LOS PACTOS EN EL TRAPECIO

La historia de los pactos interpartidarios de gobierno, es la historia de sus oscilaciones en el trapecio de la política argentina. Aun en condiciones muy favorables de realización e implementación —como en el caso estudiado— no pudieron soportar las tensiones derivadas de factores de larga duración: el carácter irresoluto de la lucha en torno a la constitución de la identidad nacional —reflejado en el conflicto educativo— y la práctica de un clientelismo no cooperativo que se tradujo en una disputa feroz por el control de los recursos institucionales del Estado. Si estas afirmaciones son correctas, cabe revisar la tesis clásica según la cual la política argentina se organizó de modo casi exclusivo —a partir de 1955— en base al clivaje peronismo-antiperonismo. Una lectura atenta del relato histórico precedente, permite comprobar que ninguna de las dos rupturas de la junta consultiva interpartidaria tuvo su origen en la actitud de los actores frente al peronismo. Sus contradicciones trascendían el fenómeno peronista —y en gran medida eran independientes del mismo— porque tenían sus raíces en los orígenes mismos de la formación de la Argentina moderna; es decir, sus tensiones derivaban de factores previos, inclusive, a la propia existencia del peronismo.

Francisco Delich ha señalado con acierto que la disputa por la nación es la "confrontación originada en la reivindicación excluyente de su representación, por parte de grupos sociales, clases, personas o instituciones". Y esta disputa lejos de ser coyuntural, supone un conflicto por "la posesión simbólica de un principio supremo de legitimidad".⁴⁴ Esta controversia era la que subyacía tras la lucha entre los estudiantes de la F.U.C. apoyados por el radicalismo y los partidos de izquierda, y la jerarquía eclesiástica respaldada por el diario *Los Principios*. Entre la Argentina plural que soñaban los primeros y el país cuasi-integrista que postulaban los segundos, había poco espacio para el compromiso. Y como ha reconstruido meticulosamente la historiadora Silvia Roitenburd, este conflicto que hace a la identidad de la Argentina como nación, encontraba en Córdoba peculiares resonancias en virtud de la presencia de un clericalismo tan vigoroso como premoderno.⁴⁵

En segundo lugar, la junta consultiva interpartidaria sucumbió por el peso de una tradición que habituó a los partidos a prácticas de clientelismo no cooperativo. A diferencia de la Italia de post-guerra, los partidos fueron renuentes a compartir el botín estatal. Con el peronismo fuera de juego, radicales y conservadores tendieron a reproducir, como en el pasado, prácticas de exclusión recíprocas apenas disimuladas por su breve historia

44. Francisco Delich, "La disputa por la Nación", en *Crítica y Utopía*, Nº 18, pág. 11-13 (1989).

45. Silvia Roitenburd, "Educación y control social. El nacionalismo católico cordobés (1862-1944)", en Adriana Pugros, *La historia de la educación en las provincias*, tomo 4, Ed. Galerna, Buenos Aires. 1993.

de lucha común contra el régimen peronista. Fogueados en los viejos modos de hacer aprendizaje que los conducía a una cultura política plenamente democrática. De allí, como veremos en los años posteriores, su complicidad con los golpes de Estado.

En suma, educación e identidad nacional, clientelismo y Estado, fueron clivajes que operaron en detrimento de la posibilidad de alcanzar acuerdos duraderos. Era más fácil la ruptura que el equilibrio en el trapecio, y las escisiones tuvieron menos que ver con lo "nuevo" —el peronismo— que con los nudos irresueltos del pasado.